

Más que un problema humanitario, es, principalmente, un problema político

Sáhara Occidental: un pueblo dividido y olvidado, silenciado y traicionado

De la pobreza en los campamentos de refugiados del pueblo saharauí a la brutal represión en los territorios ocupados

Jaime A. Tonda

En torno a la causa del Pueblo Saharauí se ha generado una de las mayores redes de asociaciones solidarias y organizaciones humanitarias dentro y fuera del estado español. Sin embargo, 32 años después, el Sáhara sigue militarmente ocupado por las fuerzas marroquíes y un muro de 2.720 kms. (sembrado de minas y en el que está concentrado el 90% del ejército marroquí con un gasto diario superior a los 200 millones de las antiguas pesetas) divide a la población saharauí entre los territorios ocupados por Marruecos, los territorios liberados y controlados por el Frente Polisario y los Campamentos de Refugiados situados en el desierto argelino. Todo ello ante la actitud hipócrita del Gobierno español. De este y de todos los que le han precedido desde 1975.

A pesar de las Resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de la ONU que reconocen el derecho del Pueblo Saharauí a la libre determinación mediante referéndum, el Gobierno español sigue colaborando prioritariamente con el Reino de Marruecos y recientemente ha rearmado al ejército marroquí al que ha vendido 1.200 vehículos blindados de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) y 800 camiones militares de distintos tipos, lo que se suma a las 10 patrulleras para vigilancia de costas vendidas en noviembre del año pasado. Así mismo, apoya acuerdos de la Unión Europea con Marruecos basados en la explotación de recursos naturales (como los caladeros de pesca) que no le pertenecen y que han sido expoliados por el Reino de Marruecos a sus legítimos dueños: el Pueblo Saharauí.

El pasado 14 de noviembre se cumplieron 32 años desde la firma en Madrid del Acuerdo Tripartito de 1975, mediante el cual el gobierno español abandonó el Sahara Occidental entregándolo a Marruecos y Mauritania. Los Acuerdos Internacionales establecen que en un proceso de descolonización es el país ocupan-

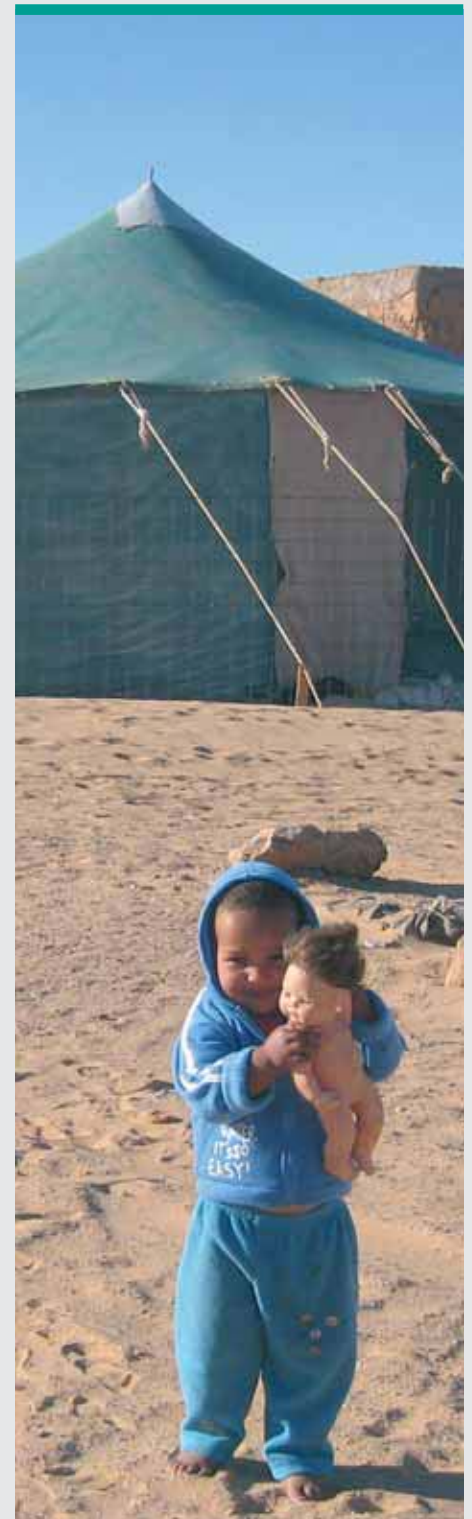
te (en este caso España) el responsable directo de llevarlo a cabo. El Estado Español es por tanto responsable, jurídica e históricamente, de este proceso inconcluso de descolonización que dejó abandonado al Pueblo Saharauí en manos de otro ocupante, el reino de Marruecos, al que ninguna legislación internacional reconoce soberanía sobre el territorio saharauí que ocupa.

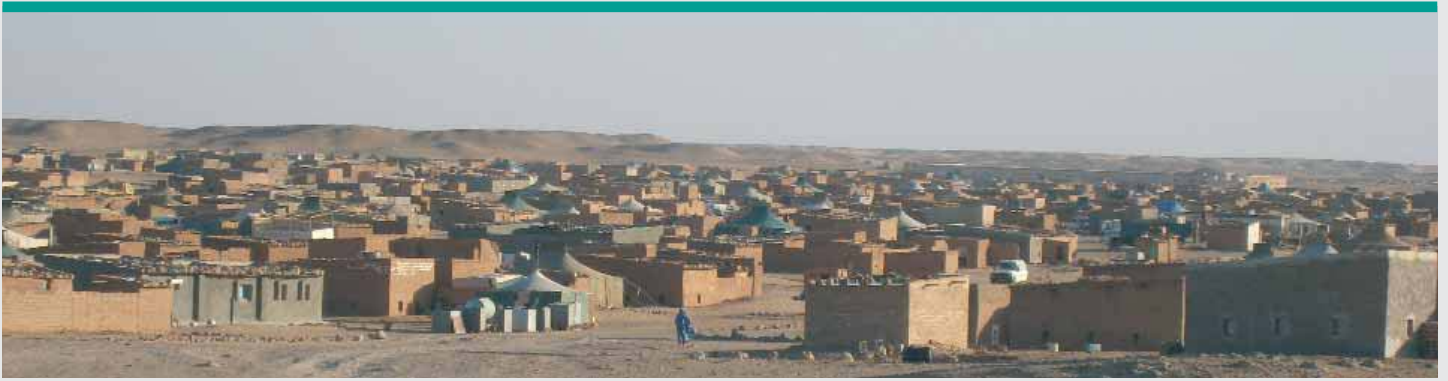
Tras la firma de dichos acuerdos, el ejército marroquí invadió las ciudades y el Pueblo Saharauí fue expulsado de su territorio. Mientras huían hacia el desierto fueron bombardeados con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación, arrojados desde aviones o helicópteros o enterrados vivos. Hombres y mujeres fueron torturados y violados. Los supervivientes se refugiaron en el desierto de Tindouf, en la Hamada argelina.

Allí establecieron los Campamentos de Refugiados, donde permanecen durante más de 32 años soportando unas condiciones de vida extremadamente duras, con temperaturas superiores a los 50° en verano y muy frías durante las noches de invierno. Un lugar en el que nada existe: la comida, el agua potable, la ropa, las medicinas, todo proviene del exterior.

En los Campamentos no se dispone de una economía de autoabastecimiento y se está utilizando el hambre como un arma contra la población saharauí. La Media Luna Roja ha hecho diversos llamamientos internacionales ya que las reservas alimentarias de los Campamentos están prácticamente agotadas. Mientras, por presiones políticas, el Programa de Alimentos Mundial (PAM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) están recortando los suministros de alimentos.

Por otro lado, en los territorios ocupados por Marruecos se mantiene una brutal represión contra la población saharauí: detenciones, torturas, cárcel, muertos y desaparecidos. Represión que ha dado





lugar a la intifada saharauí iniciada el 21 de mayo de 2005.

La represión alcanza también a las escuelas e institutos. Muchos saharauis abandonan los estudios en centros públicos por la presión que sufren de las autoridades marroquíes dentro y fuera de las clases y en el patio: policías que se sientan a su alrededor, no les dejan hablar con nadie, revisan los libros para ver si tienen "propaganda", provocan, revisan, controlan sus conversaciones, les pegan y les rompen los vestidos (melhfás) saharauis. Durante las fiestas nacionales saharauis les prohíben vestir con sus trajes típicos o con colores de la bandera saharauí... les rompen los vestidos, les pegan y les detienen. Incluso, intentan sobornarlos llegando a ofrecerles dinero para que digan que son marroquíes. Ahora, tras la desaparición de 542 saharauis desde 1975 y la querrela de asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos saharauis, en España la Audiencia Nacional ha decidido investigar a 13 altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas.

A estas alturas del problema, quizá no iría mal recordar algunas declaraciones que demuestran la alta hipocresía que mueve las relaciones internacionales de los poderosos. El 2 de noviembre de 1975, el actual Jefe del Estado Español (entonces Príncipe Juan Carlos) visitó el Aiún manifestando lo siguiente: "Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y el honor... deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharauí, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen". Doce días después se firman los Acuerdos de Madrid y el Estado español entrega el Sahara a Marruecos y Mauritania.

Un año después, el 14 de noviembre de 1976, el entonces Secretario General del PSOE, Felipe González, visita los territorios liberados saharauis y afirma: "Hemos que-

rido estar aquí hoy para mostrar nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975... El Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final, estar convencidos que vuestra República independiente y democrática se consolidará y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Vengo no a prometeros algo, sino a comprometerme con la historia: nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final".

Su "compromiso con la historia" es de todos conocido. El de él y el de los diferentes gobiernos que le han sucedido. Basta recordar que en junio del pasado año PSOE, PP y CiU votaron en contra del reconocimiento de la República Árabe Saharaí Democrática (RASD) en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso al votarse una iniciativa de ERC, apoyada por IU-ICV y CC, que instaba al Gobierno español a reconocerla.

Sobran palabras, faltan hechos. 7 Secretarios Generales de la ONU han pasado ya sin ser capaces de imponer sus Resoluciones. La Asamblea General de la ONU ha aprobado ya 41 Resoluciones reafirmando el derecho del Pueblo Saharaí a su autodeterminación. El 30 de abril de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba la Resolución 1754 que "Exhorta a las partes a que entablen negociaciones... con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que conduzca a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental". El próximo 7 de enero se realizará en Manhest, alrededor de Nueva York, la tercera ronda de esas negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Las dos anteriores, celebradas en junio y agosto pasados, fracasaron.

Bajo el lema "Lucha generalizada para imponer la soberanía y la independencia total", se celebra en la zona liberada de Tifariti el XII Congreso del Frente Polisario del 14 al 18 de diciembre... y varios respon-

sables del Frente Polisario ya han anunciado que no se descarta la vuelta a las armas si Marruecos no acepta la autodeterminación, tal y como establecen las Resoluciones de Naciones Unidas.

Cuando se publique este artículo ya sabremos la determinación aprobada en este Congreso, en el que participan más de 1750 delegados, más de 250 invitados y decenas de periodistas extranjeros.

Si después de 16 años de "alto el fuego" de nuevo se reanudara la guerra, habrá que recordar la frase pronunciada por el anterior Coordinador General de IU: "malditas sean todas las guerras y los canallas que las provocan". Y, en este caso, está claro que no será el Pueblo Saharaí el responsable de lo que vaya a ocurrir.

No estamos, como algunos pretenden hacer creer, ante un problema humanitario. Es, fundamental y principalmente, un problema político. Y en este terreno deberían multiplicarse los esfuerzos, las movilizaciones y las denuncias. Centrar el problema en la ayuda humanitaria (que sigue siendo necesaria) es la mejor manera de perpetuar y mantener oculta y silenciada una situación injusta que, además, mantiene la "dependencia" internacional del Pueblo Saharaí al que no se le permite vivir en su territorio y construir su futuro en libertad e independencia.

Frente a esta situación las entidades que apoyan al Pueblo Saharaí deberían movilizar, de manera permanente, todos sus recursos, denunciando la actitud hipócrita de los diferentes gobiernos, exigiéndoles el inmediato cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas y el reconocimiento -como han hecho ya otros 76 países- de la República Árabe Saharaí Democrática (RASD).

Las complicidades con el Reino de Marruecos son demasiado evidentes. Las traiciones y el olvido hacia el Pueblo Saharaí también. Sólo un movimiento internacional solidario, combativo y fuerte podrá hacer cambiar la actitud de nuestros gobiernos ante el conflicto saharauí.